

de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Iglesias.—Auza.—Gurza.—Lozano—Arteaga.—Ramírez.—Castañeda.—Guzman.—Zavala.—García.—E. Landa,* secretario.

Es copia. México, Agosto 18 de 1874.
Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de México por el C. Rafael Carrera, en representación de los Síndicos del concurso de Díaz y Hermano del comercio de Cuautitlan, contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que los acreedores del concurso Díaz y Hermano, formado en el Juzgado de 1ª instancia de Cuautitlan, por conducto de su síndico, solicitan el amparo de garantías contra la sentencia ejecutoria pronunciada por la 1ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado el 17 de Abril último, sobre el incidente de calificación de la quiebra, para que respecto de él se proceda con arreglo al Código de comercio de 16 de Mayo de 1854, y cuyo mandato judicial importa la violación de las garantías consignadas en el artículo 18 de la Constitución federal.

El acto reclamado, en pocas palabras puede reducirse á estos términos: El Juez de 1ª instancia del concurso, en la incidencia criminal sobre el fraude de los fallidos, decretó: que para juzgarlos se arreglara al Código de comercio ya citado; pero despues comprendió que de seguir así el procedimiento, juzgaba con una ley privativa, y en el caso, su primera determinación la revocó por contrario imperio.

Esta providencia judicial vino al Supe-

rior en apelación, y en la última instancia fué revocada, declarando la Sala de súplica que el Juez inferior, en la incidencia mencionada, debe sujetar su procedimiento al código de comercio de 1854, y cuya declaración envuelve la idea de que no juzga ni decide con arreglo á una ley privativa.

El que habla, comprende que la cuestión que nos ha traído el síndico del concurso de la sociedad Díaz y Hermano, entraña dificultades que se hallan sobre de su inteligencia; y para resolverla en el punto á que está obligado, se permite fijar como punto de partida, el sentido de lo que pueda entenderse por ley privativa. Para el caso que nos ocupa, puede entenderse por ley privativa, la que establece cierto privilegio ó escepcion para cierta clase de la sociedad, en el procedimiento de los negocios que surjan del ejercicio que la ley fundamental les concede como un derecho otorgado á todo hombre para abrazar la profesion, industria ó trabajo que mas le acomode.

El Código de 54 que el poder legislativo del Estado declaró vigente en el ramo mercantil, en lo que no se oponga á la Constitución general y particular del Estado, preceptúa entre otras varias cosas, que los comerciantes, para reputarse como tales, deben de matricularse, con otras preyecciones referentes á la parte civil administrativa que caracteriza, muy especialmente, la escepcion que hizo aquella ley de esa gran parte de individuos que forman la sociedad mexicana. A esas personas se deben juzgar con arreglo á aquella misma ley, cuando se encuentren en los casos de la responsabilidad criminal que ella establece, segregándose así de la generalidad de la gran masa social, puesto que la ley de 54 establece un procedimiento especial que sale de la esfera del orden comun.

Se palpa con mas claridad la prerrogativa de los comerciantes de que habla el Código de 54, cuando suponiéndose el caso de quiebra fraudulenta de uno de estos comerciantes, con la que verifique un indus-

trial, un agricultor ó un particular, con las mismas calidades. A los primeros, según la ley del Estado, se les juzgará con arreglo al procedimiento especial del código, y á los segundos conforme al derecho comun.

Es verdad que la Legislatura del Estado quiso salvar la inconstitucionalidad de su decreto de 11 de Julio de 1858, en la parte que declaró vigente el precitado código; pero el hecho es, que el poder judicial del Estado, ha creído que juzgando el Juez de 1ª instancia de Cuautitlan, respecto del concurso de Diaz y Hermano, conforme al referido código, no juzga en ese negocio en virtud de una ley privativa.

El que lleva la voz no tiene el mismo concepto, pues cree, que de seguir juzgando el Juez de Cuautitlan en el concurso citado con arreglo á la ley de 54, infringe el artículo constitucional, violando las garantías de las personas que van á ser juzgadas en aquel procedimiento, por que en el caso os juzga por una ley privativa.

Es indudable que los acreedores del concurso Diaz Hermano, es una de las partes que constituyen el juicio y que estan interesados en que el procedimiento sea legal; y cuando no lo consideren como tal, si en ello se interesan, y puedan violarse sus garantías, pueden muy bien solicitar la proteccion y amparo de la Justicia federal, para reparar los perjuicios que hubiesen sufrido, y evitar los que en lo sucesivo se les puedan ocasionar.

El que suscribe, pues, en virtud de las anteriores consideraciones, y con fundamento de la Constitución general en sus arts. 13 y 101, y de la ley de 20 de Enero de 1869, pide al Juzgado se sirva declarar, que la Justicia de la Unión ampara y protege á los acreedores del concurso seguido en el Juzgado de 1ª instancia de Cuautitlan, con el nombre de sociedad Diaz y Hermano, contra la sentencia ejecutoria pronunciada el 17 de Abril último por la 1ª Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, que ordenó que el Juez del concurso se arre-

gle en el procedimiento, respecto de la incidencia de la calificación de la quiebra, al Código de comercio de 16 de Mayo de 1854.

Toluca, Mayo 28 de 1874.—Cevallos.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Toluca, Junio 3 de 1874.—Visto el ocursó presentado por el C. Rafael Carrera el 28 del último Abril, solicitando que la Justicia federal lo ampare contra la sentencia de 17 del mismo mes, pronunciada en tercera instancia por la 1ª Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, en los autos seguidos en el Juzgado de 1ª instancia de Cuautitlan, sobre calificación de la quiebra de los Sres. Diaz y Hermano, la cual, disponiendo que á los fallidos se les juzgue y castigue con sujecion al Código de comercio de 16 de Marzo de 1854, declarado vigente por la ley de 11 de Julio de 1868, se dice que viola la garantía consignada en el art. 13 de la Constitución general, toda vez que manda se juzguen por una ley privativa. Visto el informe justificado y producido por la 1ª Sala citada, así como lo pedido por el C. Promotor fiscal de Hacienda, y visto por último lo alegado por las partes.

Teniendo en consideracion: Primero: que la ley mencionada de 11 de Julio, declara vigente el Código de comercio de 16 de Marzo de 1854, para los negocios mercantiles.

Segundo: que esto supuesto, y siendo negocios mercantiles los que designa la mencionada ley de 54, lib. 2ª tit. 1ª seccion 1ª, áquella se refiere á solo los comerciantes, los que en rigor, y según el testo espreso del Código de comercio de que se trata, no son otros que los marcados en él.

Tercero: que bajo este concepto, la ley se contrae no al comun de los ciudadanos, sino solo á una clase formada y reconocida por la ley, que es la de comerciantes, lo

cual confirma la constante práctica en esta capital, siempre que se trata de la aplicación del Código 6 de las leyes comunes en los negocios de quiebra.

Quarto: que si esto no es de toda exactitud, en cuanto dice relacion á todas y cada una de las prescripciones de aquel, el cual se refiere tambien y como era preciso á letras de cambio y otros pormenores, sí lo es en cuanto al procedimiento criminal contra el quebrado, así como en cuanto á la pena.

Quinto: que en tal concepto, el Código de comercio de 1854 es una ley privativa, toda vez que se refiere á las quiebras de los comerciantes, en cuya virtud su aplicación viola la garantía constitucional otorgada al hombre por el artículo 13 de la Constitución general, así como las que conceden los arts. 14 y 20 de la misma, supuesto que se hace uso de una ley dada en beneficio de acreedores y en odio de fallidos unas veces, y otras al contrario, pues esto depende de las circunstancias en que se hallan colocados en los diversos casos que ocurren, supuesto tambien que, según el procedimiento criminal detallado en el título 10 y artículos relativos, muy especialmente el 904, 6 no se forma un proceso propiamente dicho contra el reo, en el que se observen las prescripciones del artículo 20 del Pacto federal, sino que sólo se le aplica la pena, mediante la calificación que de la quiebra se hiciera, ó las diligencias que para esa calificación tienen lugar, son el proceso, y en el no se observan esas mismas prescripciones, que importan otras tantas garantías; y supuesto por último, que siendo indisputable que bajo este concepto se opone el repetido Código de comercio á la Constitución general y á la del Estado, no ha sido dado con anterioridad el hecho, toda vez que el art. 625 aludido, cuando se ha hecho mérito de la ley orgánica de Tribunales, no ha dicho otra cosa sino que aquel queda vigente para los negocios mercantiles, en cuanto no se oponga á ambas Constituciones.

TOMO VI.—PARTE II.

Y Sexto: cuanto mas considerar y ver convino.

La Justicia de la Union, con apoyo del art. 101 de la Carta fundamental de la República y de la ley de 20 de Enero de 1869, declara: que debia de amparar y desde luego ampara y protege á los CC. Ponton y Hermano y Mateo Dozal y C^a, en su calidad de Síndicos del concurso de Diaz Hermano de Cuautitlan, contra la sentencia pronunciada en tercera instancia por la 1^a Sala del Superior Tribunal de Justicia del Estado, por la cual confirmó en todas sus partes el superior auto suplicado de 12 de Febrero último, que revocó el auto del inferior de 9 de Agosto, que habia revocado por contrario imperio el de 23 de Julio, que mandó recibir á prueba la calificación de la quiebra en el concurso de Diaz Hermano, y manda se haga saber á las partes este auto definitivo; que se publique por los periódicos de costumbre y Semanario Judicial, y fecho, se eleve este expediente á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reponiéndose previamente, por el C. Rafael Carrera, el pliego de papel comun de que se hace uso, por el del sello correspondiente, que se agregará tarjado.

El C. Lic. Ramon Ortigosa, Juez de Distrito, lo sentenció y firmó. Damos fé.—
Ramon Ortigosa.—Manuel Otál y Piñas.
—Ignacio Gonzalez.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 8 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el C. Rafael Carrera, en representacion de los Síndicos del concurso de Diaz y Hermano del comercio de Cuautitlan, ante el Juzgado de Distrito del Estado de México, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que previno se sujetara el procedimiento del juicio criminal contra los fallidos; á las prevenciones del Código de co-

mercio de 16 de Marzo de 1854, vigente en el Estado por ley de 11 de Julio de 1868. Visto el informe del mismo Tribunal, acompañando copia de las sentencias pronunciadas por él; el pedimento del C. Promotor fiscal; la sentencia del inferior otorgando el amparo, y todo lo demás que de autos consta y se tuvo presente; y considerando: que la violación de que se quejan los Sres. Ponton y Hermano y Mateo Dozal y C^{as}, en el caso de haberla, no sería en su perjuicio sino en el de las personas de los fallidos, de quienes no aparece que tengan autorización para solicitar el amparo federal; que en consecuencia, no han tenido representación legítima para promover el presente recurso.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts 101 y 102 constitucionales y art. 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de revocarse y se revoca la sentencia del inferior que amparó á los quejosos, y se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege á los promovedores, contra la sentencia de que se quejan.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos, los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Iglesias.*—*Auza.*—*Lozano.*—*Arteaga.*—*Ramírez.*—*Castañeda.*—*Altamirano.*—*Guzmán.*—*Zavala.*—*García Ramírez.*—*E. Landa*, secretario.

Es copia. México, Agosto 17 de 1874.
—*E. Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por Arcadio Osorio, contra los procedimientos del Gefe político de la Capital del Estado, que lo ha juzgado conforme á la ley de 3 de Mayo del año pasado sobre saltadores y plagiarios.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En el testimonio de la causa instruida por la Gefatura política de esta Ciudad, contra el reo Arcadio Osorio, hay constancias irrefragables, de que el delito por que se le juzgó y sentenció, fué cometido en despoblado, distante el lugar mas de cien metros de la última casa de esta población.

Con arreglo á la ley de 3 de Mayo de 1873, los delitos que se cometen en despoblado, cuando son referentes á robo ó plagio, su conocimiento corresponde á la autoridad política del lugar donde se cometió, y la pena que se le impone es la que determina la ley mencionada de 3 de Mayo. Pues si el reo Osorio robó en despoblado, como está comprobado en el testimonio de su causa, la autoridad que debía juzgarlo era la política, y la pena que habia de imponerle, la determinada en ley. Luego si este es el hecho de que se queja, y por el que ha interpuesto el presente recurso, el amparo debe denegársele, por no haber en su perjuicio violada ninguna garantía constitucional, y menos las que marca en su ocuso, por estar suspensas para los saltadores y plagiarios.

En mérito de lo expuesto, el Promotor pide á V. así se sirva decretarlo con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, 28 de Abril de 1874.—*Eugenio Sanchez.*